

125-19.61

Santiago de Cali,

Asunto: Remisión respuesta de fondo a Denuncia Ciudadana CACCI 1643 DC-42-2020 del 06 de Abril del 2020.
Traslado por Competencia de la CGR - 2020EE0035549 del 26-03-2020
Cód. 2020-175739-80764-NC.

Cordial saludo,

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca recibió la denuncia del asunto, mediante traslado por Competencia de la Contraloría General de la República, DP Código 2020-175739-80764-NC, relacionada con presuntas irregularidades en malos manejos de los recursos públicos por parte del Alcalde Municipal de Bolívar - Valle, con violación a lo establecido en Decreto 2785 de 2011.

Con ocasión de la declaratoria de emergencia sanitaria por causa del COVID-19, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca expidió la Resolución No. 266 del 16 de marzo de 2020, Resolución No. 277 del 17 de marzo de 2020, Resolución No. 287 del 24 de marzo de 2020, Resolución No. 296 del 8 de abril de 2020, Resolución No. 312 del 24 de abril de 2020, Resolución No. 324 del 07 de mayo de 2020, Resolución No. 330 del 22 de mayo de 2020 y la Resolución N. 339 del 29 de mayo de 2020, por medio de las cuales se suspendieron los términos para los trámites de las denuncias ciudadanas, derechos de contradicción y demás, desde el días 16 de marzo de 2020 hasta el 01 de julio de 2020.

A través de la Resolución No. 387 del 01 de julio de 2020, se reanudaron los términos para los procesos y procedimientos a cargo de la Dirección Operativa de Participación Ciudadana a partir del **06 de julio de 2020**, reiniciando el trámite de las denuncias ciudadanas.

Mediante Resolución N°427 del 23 de julio de 2020, se suspendieron los términos para el día 24 de julio de 2020, reanudándose los mismo el día 27 de julio de 2020.



Se tiene entonces que, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, con el fin de indagar sobre los hechos con presunta connotación fiscal referidos en la denuncia, efectuó solicitud de información al sujeto de control, mediante oficio CACCI 1702 del 15 de julio de 2020, en el que se solicitó:

1. *Contrato de prestación de servicios No. C.P.S.004-2020, prestación Cuyo objeto contractual es el siguiente: prestación de servicios profesionales en el área jurídica para el apoyo especializado a los funcionarios de nivel directivo, profesional, ejecutivo y técnico en todo lo relacionado con temas legales que tengan que ver con la administración municipal de bolívar, valle del cauca”, con la señora Johana carolina mora Sánchez, por un valor de \$30.000.000 a un plazo de 6 meses.*
2. *Certificado salarial del Alcalde Municipal de Bolívar Valle para la vigencia 2020.*

El sujeto de control mediante correo electrónico de fecha 23 de julio de 2020 dio respuesta a la solicitud interpuesta.

Así las cosas, la documentación tenida en cuenta por la Dirección Operativa de Participación Ciudadana para brindar respuesta de fondo es la siguiente:

1. En 121 folios contrato C.P.S.004-2020.
2. En 1 folio documento de respuesta a la Contraloría.
3. En 1 folio certificación salarial del Alcalde Municipal de Bolívar – Valle.

Así las cosas, una vez recaudada la información pertinente y necesaria para brindar una respuesta de fondo al asunto, la Dirección Operativa de Participación Ciudadana, procedió a emitir el Informe Final de acuerdo con el procedimiento establecido en la entidad.

Una vez analizado el contrato estatal, se logra evidenciar que, la Administración Municipal de Bolívar- Valle, suscribió el contrato CPS-004-2020, por un valor total de treinta millones de pesos (\$30.000.000), por un plazo de ejecución de seis (06) meses, para un pago mensual de cinco millones de pesos (\$5.000.000).

De acuerdo con certificaciones expedidas por el Municipio, contenidas en el expediente contractual, la contratista deberá desarrollar sus actividades dentro de los diferentes procesos administrativos cumpliendo con los postulados constitucionales y legales, así como velar por los intereses dentro de la entidad así como en los procesos judiciales que cursan en su contra de los distintos despachos judiciales, teniendo en cuenta la falta de personal idóneo para suplir la necesidad.

Por lo anterior y con el fin de dilucidar los hechos que nos ocupan, es necesario señalar que la ley 80 de 1993 establece: **“Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones *que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos***



en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:

(...)

3o. Contrato de Prestación de Servicios.

<Apartes subrayados **CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES**> Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades **no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados**". (subraya y negrilla fuera del texto).

Así mismo, el artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015 respecto de las condiciones para contratar por prestación de servicios en las entidades públicas, reza: "Los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar **cuando no exista personal de planta** con capacidad para realizar las actividades que se contratarán.

Se entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo, entidad, ente público o persona jurídica, es imposible atender la actividad con personal de planta, porque de acuerdo con los manuales específicos, no existe personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio, **o cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implica la contratación del servicio, o cuando aun existiendo personal en la planta, éste no sea suficiente, la inexistencia de personal suficiente deberá acreditarse por el jefe del respectivo organismo**". (subraya y negrilla fuera del texto).

Ahora bien, el denunciante plantea, la violación a lo establecido en Decreto 2785 de 2011, por lo cual se debe precisar lo siguiente:

El Decreto 2785 de 2011, mediante el cual se modifica parcialmente el artículo 4° del Decreto 1737 de 1998, "por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público", sin embargo en el parágrafo 3 del artículo 1 del Decreto 2785 de 2011, precisa: "De manera excepcional, para aquellos eventos en los que se requiera contratar servicios altamente calificados, podrán pactarse honorarios superiores a la remuneración total mensual establecida para el jefe de la entidad, los cuales no podrán exceder del valor total mensual de remuneración del jefe de la entidad incluidos los factores prestacionales y las contribuciones inherentes a la nómina, relacionadas con seguridad social y para fiscales a cargo del empleador. En estos eventos el Representante Legal de la entidad deberá certificar el cumplimiento de los siguientes aspectos: 1. Justificar la necesidad del **servicio personal altamente calificado**. 2. Indicar las características y calidades específicas, altamente calificadas, que reúne el contratista para la ejecución del contrato, y 3. Determinar las características de los productos y/o servicios que se espera obtener". (subraya y negrilla fuera del texto).



Cabe resaltar que la expresión “altamente calificada hace referencia a las condiciones profesionales de excelencia que por razones de estudios, conocimientos, talentos, destrezas y habilidades, la cual capacita a la persona para la ejecución de tareas o la aplicación de conocimientos, y exceden los requisitos establecidos para ocupar un empleo. Y la experiencia profesional, en cambio, es una de las condiciones que junto con el requisito de estudio, forma parte del perfil de competencias que ordinariamente se requieren para ocupar el empleo.

Así mismo, es menester indicar, los criterios que podrían utilizarse para determinar la experiencia altamente calificada por lo cual es viable hacer una interpretación extensiva del mismo concepto utilizado para el reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, de acuerdo a la sentencia del Consejo de Estado, del veintidós (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018), con radicación No: 250002342000201302982 01, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B cuyo Magistrado Ponente fue CÉSAR PALOMINO CORTÉS: “(...) *Ahora bien, en relación al conteo de la experiencia altamente calificada, si bien al interior de esta Sección en el año 2014, hubo una variación respecto al criterio jurisprudencial tenido en cuenta, este fue rectificado en diversas providencias, en el sentido de que el misma se empieza a contabilizar después de la obtención del título de formación avanzada y no del profesional, por cuanto ello tiene como objetivo principal, vincular al servicio público a servidores con conocimientos calificados cuyo desempeño demanda estudios específicos y experiencia adquirida con posterioridad a la obtención del título*”.

Así las cosas, resulta viable que de manera excepcional, en virtud del principio de autonomía administrativa, se suscriba contratos como en el caso en concreto, de acuerdo a la asesoría especializada contratada para el Municipio, cuyos honorarios superen la remuneración del Alcalde, siempre que los mismos obedezcan a servicios altamente calificados, y con las excepciones contenidas en la normatividad vigente, caso en el cual el representante legal de la entidad deberá certificar el cumplimiento de los siguientes aspectos: 1. Justificar la necesidad del servicio personal altamente calificado. 2. Indicar las características y calidades específicas, altamente calificadas, que reúne el contratista para la ejecución del contrato, y 3. Determinar las características de los productos y/o servicios que se espera obtener, lo cual se pudo observar dentro del expediente contractual remitido por el Sujeto de Control.

Esto le permite concluir a la Dirección Operativa de Participación Ciudadana de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, que no se evidenció circunstancias irregulares que conllevara a predicar la existencia de un presunto daño patrimonial a las arcas del Estado, por las consideraciones esbozadas.

De esta manera queda debidamente formalizado el diligenciamiento de la denuncia ciudadana No. **DC-42-2020**, la cual se procede dejar en conocimiento de las partes interesadas.

Se remite copia de esta respuesta final al sujeto de control Municipio de Bolívar-Valle del Cauca, con el fin de que la entidad tenga conocimiento del mismo y quede debidamente notificada.



Finalmente, se resalta la importancia de su acción en beneficio del interés general y se le exhorta a ser partícipe, del control social articulado con el fiscal, a través de la presentación de denuncias, por los distintos medios de recepción de la C.D.V.C., entre ellos, la página web institucional www.contraloriavalledelcauca.gov.co y al correo electrónico contactenos@contraloriavalledelcauca.gov.co, dando a conocer un relato preciso de los hechos o irregularidades fiscales detectas, con una descripción puntual de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los mismos, en relación con el uso indebido de los recursos públicos, la mala prestación de los servicios públicos en donde se administren recursos públicos y sociales, la inequitativa inversión pública o el daño al medio ambiente, que ameriten credibilidad o que se encuentren soportadas en medios probatorios que permitan iniciar la acción de competencia fiscal.

Finalmente, se le informa al denunciante que puede consultar el Informe Final de Respuesta a la Denuncia, en el enlace Web institucional <https://www.contraloriavalledelcauca.gov.co/publicaciones/1343/denuncias-tramitadas-durante-las-vigencias-2017-2018-2019-y-2020/> la cual ha quedado identificada como DC-42-2020.

Cordialmente,

Martha I. Gutiérrez

MARTHA ISABEL GUTIERREZ SEGURA
Directora Operativa de Participación Ciudadana

Copia: CACCI 1643 DC-42-2020
Contraloría General de la República: cgr@contraloria.gov.co Diego Fernando Durango Hernández – Presidente
Gerencia CGR Valle.
Municipio de Bolívar-Valle: contactenos@bolivar-valle.gov.co

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Daniela Blandón Prado	Técnico Operativo	
Revisó	Martha Isabel Gutiérrez Segura	Directora Operativa de Participación Ciudadana	
Aprobó	Martha Isabel Gutiérrez Segura	Directora Operativa de Participación Ciudadana	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigente y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

